



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado

Referencia: Ordinario
Demandante: JUAN CAMILO SIERRA MESA
Demandado: JESUS SIERRA GAVIRIA
Decisión: Confirma auto
Radicado: 05001 31 03 017 2008 00402 01
Auto Nro: 077

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR
SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veinticinco de julio de dos mil veintitrés

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la providencia emitida el 27 de abril de 2023, por el JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, mediante la cual se APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS.

ANTECEDENTES:

Dentro del proceso de la referencia se profirió sentencia de primera instancia el día 8 de febrero de 2015, la cual fuera confirmada por esta Corporación 2 de abril de 2018, casada y dictada la sentencia sustitutiva por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de septiembre de 2022, imponiéndose condena en costas en contra de la parte demandada, posteriormente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, por la

Secretaría del Juzgado de primer nivel se procedió a liquidar las costas y agencias en derecho impuestas.

Inconforme con dicha decisión el apoderado de la parte demandante, interpuso oportunamente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, argumentando que las costas fijadas en primera instancia contravienen lo reglado en el estatuto procesal; en tanto que, acorde con lo establecido en el Acuerdo 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura en donde se prevé que en primera instancia se fijará hasta el 20% de las pretensiones reconocidas o negadas y se incrementarán hasta en 5% SMMLV si se reconoce o niega una obligación de hacer; refirió que para determinar el valor de las pretensiones al que se refiere este acuerdo, en su criterio, debe utilizarse el mismo parámetro utilizado por esta Corporación, en el sentido de valorar el interés para recurrir en casación dentro de éste proceso, que fue el valor de bienes que habrán de regresar a la masa sucesoral y en la cual se consideró una cuantía aproximada de \$6.825.006.646 sin incluir las acciones de las sociedades ladrilleras; advirtió que acorde con la sentencia sustitutiva el valor al que debe aplicarse las tarifas previstas en el acuerdo mentado es de \$18.824.403.091; respecto a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado, debe tenerse en cuenta que el proceso ha durado más de 14 años y ha sido de altísima complejidad, como quiera que se trata de un proceso de simulación absoluta, dentro del cual han surtido recursos de apelación, casación y dos tutelas, a lo que debe sumarse la ardua actividad probatoria que debió adelantarse por la naturaleza misma de la pretensión formulada. Refirió que él iudex a quo pudo fijar las agencias en derecho hasta el 20% del valor de las pretensiones; es decir, hasta \$3.764.880.618; sin embargo, se establecieron en la suma de \$5.800.000.00, lo que equivale al

0.0308%, lo que se constituye en un grave error debido a que no consulta con lo establecido en el Art. 366 del C. General del P.; manifestó que las agencias debieron fijarse, por lo menos, el 15% del valor de las pretensiones; esto es, \$2.823.660.463, lo que impone la modificación de la providencia impugnada, ordenando que las agencias en derecho que se deben incluir en la liquidación de costas sea de ese valor.

Una vez corrido el respectivo traslado, la parte contraria se pronunció, solicitando se despacharan desfavorablemente las pretensiones. Una vez recibido el expediente en esta Corporación, resulta preciso anotar que en sede de segunda instancia, lo procedente es dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 323 del Código General del Proceso, el cual respecto al trámite de la apelación de autos dispone que: "*Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisibile, así lo decidirá en auto; **en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso***", razón por la cual al no advertirse la existencia de alguna causal de inadmisión del recurso, se procederá de plano a su resolución.

Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes

CONSIDERACIONES

La controversia sometida a estudio de la Sala se contrae a examinar si en este caso resulta procedente modificar el valor de la liquidación de costas en el sentido de aumentar su quantum tanto en primera como en segunda instancia, o si, por el contrario, dicha condena debe ser objeto de confirmación.

Al respecto, vale la pena aclarar que el concepto de costas procesales, corresponde a los gastos que es necesario sufragar durante el trámite del proceso para obtener judicialmente la declaración de un derecho, el cual incluye la fijación de las respectivas agencias en derecho, cuya regulación se encuentra, para el caso concreto, en el Acuerdo 1887 de 2003 modificado por el Acuerdo 2222 de 2003, emanados del Consejo Superior de la Judicatura.

Luego, las costas procesales y las agencias en derecho son conceptos entrelazados, pero difieren en la medida en que éstas se encuentran incluidas en aquellas y por lo tanto, la legislación adjetiva civil también contempla un mecanismo independiente para debatir lo relativo a cada una de estas condenas, pues mientras la condena en costas puede ser objeto de revisión a través del recurso de apelación contra la sentencia que la impuso, el monto de las agencias en derecho debe hacerse mediante el ejercicio de los recursos de reposición y apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas.

De la lectura del recurso interpuesto, se deduce que el motivo de inconformidad se orienta a cuestionar el valor de las agencias en derecho, fijadas a cargo de los demandados y a favor de los demandantes, gravitando la impugnación en torno a la condena propiamente dicha en segunda instancia, pues en criterio del recurrente dicha condena en costas debió ser inferior, debido a que donde más despliegue procesal se dio fue en primera instancia

Precisada la causa de la condena en costas procesales y de su componente agencias en derecho, resulta oportuno respecto de las

últimas revisar la regulación que se encuentra en el Acuerdo citado, en donde en su artículo 3º se establece: *"El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones"*.

Adicionalmente, resulta preciso señalar que en vigencia del actual artículo 365 del Código General del Proceso, se ha acogido un criterio de índole objetivo para la condena en costas. En efecto, la mencionada norma dispone que: *"1. **Se condenará en costas** a la parte vencida en el proceso, o **a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación**, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella."*

De igual manera, respecto a la liquidación de las costas procesales, el numeral 4 del artículo 366 ibídem, establece que para la fijación de las agencias en derecho se deberá atender las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo el Juez tener en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.

Descendiendo al caso concreto, ha de tenerse en cuenta que el Acuerdo 1887 de 2003 modificado por el Acuerdo 2222 de 2003, por medio de la cual se establecen las tarifas de agencias en derecho, prescribe que, tratándose de procesos ordinarios de mayor cuantía, las tarifas de agencias en derecho en primera instancia, son *"Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia."* Y *"...En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes"*.

Bajo esta perspectiva, es claro que dentro de éste proceso la actuación se ha visto compelida a acaecimientos que han determinado que la misma sea ardua y duradera en el tiempo; no obstante es claro para ésta Corporación que acorde con las normas transcritas, se debe tener en cuenta el valor de las pretensiones, que como atinadamente lo estableciera el Juez de primera instancia, no pueden equipararse al valor estimado por el apoderado de la parte demandante, sino a lo determinado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia sustitutiva del 29 de septiembre de 2022, en donde además de establecerse una obligación de hacer, se condenó al pago de los frutos en la suma de \$5.370.136.161,86.

Pese a lo anterior, acudiendo a los principios de equidad y acceso a la administración de justicia que priman sobre las normas sustanciales y procesales, pues lo que buscan es que se imparta justicia por parte del operador de manera justa, equitativa y dando la posibilidad a las partes de acudir y defender sus derechos dentro de las actuaciones jurisdiccionales, resulta desproporcionado el valor que pretende la parte demandante sea fijado por éste concepto, toda vez que pese a que las pretensiones de los actores

son elevadas, la suma fijada en el auto que resolvió la reposición en contra del auto que aprobó las agencias en derecho se encuentra acorde con la gestión realizada, la duración del proceso y las actuaciones desplegadas por el abogado de los pretensores.

En este orden de ideas, la condena dada en primera instancia, considera este Magistrado, se ajustó a la actuación que en todas las instancias se desplegó, acorde con lo argumentado en esta providencia, razón por la cual el auto apelado debe ser **CONFIRMADO**.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

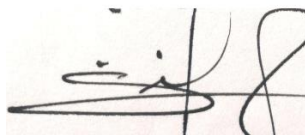
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMA el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Para los efectos del inciso final del artículo 323 del C. G del P. se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE



JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado